

DECLARACIÓN del 3^{er} COMITÉ ORDINARIO de UGT-ARAGÓN

Nuestro día a día se desenvuelve en unas circunstancias que son consecuencia, más visible que nunca, de acontecimientos globales que condicionan la actuación de los agentes económicos, políticos y sociales y la vida diaria de los ciudadanos.

Tres años después de su inicio, la pandemia de covid19 no ha cesado y, aunque las medidas restrictivas en la vida social se han atenuado mucho -incluso en el país que más ha tardado en hacerlo, China- el terremoto que supuso en la vida económica sigue produciendo réplicas. El efecto de parón y puesta en marcha de la economía mundial, que alteró las cadenas de suministros y el mercado de materias primas, sigue generando cuellos de botella que continúan alterando la producción industrial de algunos sectores.

La guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania, que ya dura un año, y cuyo desenvolvimiento hace pensar en una prolongación indefinida, amenaza las vidas de los ciudadanos de un país, Ucrania, que no inició la agresión, y los efectos sobre la economía mundial son igualmente indeseados y fruto únicamente de la voluntad de extorsión de Putin sobre la Unión Europea. El encarecimiento de los precios de la energía ha puesto en jaque sobre todo a los países de la Unión, y singularmente a los más dependientes del gas ruso, provocando una espiral de inflación que amenaza el nivel de vida de los ciudadanos en general, y de los trabajadores y trabajadoras en particular.

Todas estas convulsiones han llevado a muchos a replantearse los fundamentos de las doctrinas ultraliberales que han gobernado la economía y la globalización durante las tres décadas previas a la crisis económica de 2008, que fue consecuencia de esas mismas doctrinas y combatida con sus recetas, que terminaron por disparar los niveles de desigualdad mundial.

Y relacionado con todo esto asistimos a ataques permanentes contra el sistema democrático, de mayor o menor intensidad, que van reduciendo el nivel de libertad en el mundo, con las consecuencias que ello tiene para el ejercicio de los derechos, y singularmente el de ejercer, solidariamente, la labor sindical.

La Unión Europea se enfrenta al reto de buscar su lugar en un mundo multipolar en el que su misión ha de ser, precisamente, la defensa de un modelo social que, pese a los excesos de los últimos años, sigue siendo una mezcla hasta ahora no alcanzada de libertad política y desarrollo de un sistema económico capaz de proveer de servicios básicos a sus ciudadanos. Las circunstancias han hecho que, una vez resueltas las dudas electorales en los principales países, y consumado el Bréxit, las viejas recetas hayan sido cambiadas por la puesta a disposición de los países de fondos solidarios que deben facilitar la transición a una economía más verde y digital y, al tiempo, garantizar soberanía sobre producciones que se han rebelado cruciales para nuestro bienestar. Y es tiempo de resolver problemas de gobernanza de las instituciones europeas que devuelvan a los ciudadanos la confianza en las decisiones que se toman.

España atraviesa una crisis institucional derivada de la polarización impuesta por quienes nunca quieren verse fuera del poder. La fragmentación del mapa político bipartidista imperfecto vigente durante los treinta primeros años de democracia ha permitido a los ciudadanos adaptar su voto a sus expectativas, pero al tiempo ha extremado las posibilidades de gobierno, porque los principales partidos no buscan la estabilidad en la moderación, sino en la radicalización. Y esto se produce en un momento en que, de no resolver esa contradicción, el país carecerá de los consensos necesario para llevar a cabo las reformas estructurales que los tiempos requieren, relacionadas con la economía, pero también con el equilibrio social y la lucha contra las desigualdades. La mezcla de las expectativas económicas con las mal llamadas guerras culturales impide una hoja de ruta clara.

En Aragón esa tendencia puede hacerse presente si la tradicional existencia de partidos capaces de pactar diferentes tipos de gobierno se ve amenazada. De hecho, los últimos acontecimientos políticos apuntan a ello y una acentuada radicalización en los diferentes bloques

Por último, cabe destacar que la economía no ha cumplido los peores augurios de quienes, quizá interesadamente, anunciaban recesión. Aunque en los últimos meses se ha notado una desaceleración que comparte nuestro país con el conjunto de las economías del euro, parece que el consenso apunta a unos trimestres de estancamiento para pasar de nuevo al crecimiento y recuperar los niveles de producción prepandemia.

El empleo, de acuerdo con este devenir de la economía, ha resistido a lo largo del año, aumentando la ocupación y disminuyendo el desempleo, aunque también se ha notado una ralentización recogida por los últimos datos conocidos. Lo ha hecho, además, en contra de los augurios de los conservadores económicos, que atribuyeron a algunas decisiones del Gobierno potencialidades destructivas. Lejos de eso, el empleo ha crecido, y el creado es de mayor calidad gracias a la reforma laboral, que ha permitido reducir sensiblemente los niveles de precariedad, siendo especialmente eficaz en el combate contra la temporalidad.

La otra pata de la calidad del empleo, sin embargo, está amenazada. Los salarios pierden, por segundo año consecutivo, poder adquisitivo, y en 2022 en mayor medida que en el año anterior. Si en 2021 los salarios crecieron, según datos del registro de convenios colectivos del Mº de Trabajo, un 1.7%, la inflación media fue del 3.1%. En 2022 estas cifras son del 2.8 y el 8.4 respectivamente, por lo que podemos hablar de una pérdida acumulada de poder adquisitivo de siete puntos en dos años. Aunque algunos deslizamientos salariales puedan mitigar estas cifras, estamos hablando de un duro golpe a la economía de los trabajadores y trabajadoras, que sufren los efectos de unos precios disparados, en gran medida por la influencia del precio de la energía, pero también por la traslación de esos incrementos, en segunda ronda, a los precios de los productos. Se produce así una traslación en exclusiva de los costes de la crisis a las economías de los trabajadores.

Aunque el Gobierno ha tomado medidas para paliar los efectos de la inflación en general, y sobre todo entre los más vulnerables, se hace necesario encontrar fórmulas que, mediante el diálogo social, roto unilateralmente por los empresarios, permitan restaurar el poder adquisitivo de los trabajadores.



El diálogo social ha sido un puntal en el desenvolvimiento económico del actual Gobierno. La agenda inicial del diálogo social hubo de aplazarse para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y en ello jugó un papel importante con diversas medidas entre las que cabe destacar la habilitación de la figura de los expedientes temporales de empleo, que permitieron salvar empleos y empresas.

En una segunda fase del diálogo social, superadas las dificultades más graves de la pandemia, se abordaron asuntos tan importantes como la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Con la primera, se derogaron las medidas más negativas de la reforma impuesta por el anterior Gobierno y se aseguraron los recursos del sistema y el poder adquisitivo de los pensionistas actualizando estas con un incremento del 8.5 en referencia al IPC

Con la segunda se pretendieron dos objetivos fundamentales: reducir la precariedad y reforzar la negociación colectiva. Los datos avalan la eficacia de la primera parte, que ha permitido reducir los niveles de precariedad de nuestro mercado de trabajo. En cuanto a la segunda, constituye una oportunidad que los empresarios están arruinando.

Precisamente cuando más necesario sería abordar una negociación colectiva articulada y orientada a combatir nuestro principal problema, la inflación, los empresarios han desertado y han invalidado el instrumento de la concertación. Cada vez es más evidente que se mantuvieron en la mesa del diálogo social en los momentos en que podían obtener beneficios en forma de dinero público para sus empresas, y con intención paliativa en el caso de la reforma laboral. Cuando se ha tratado de aportar, en la negociación salarial, se han marchado de la mesa.

Para la UGT es necesario retomar el diálogo social con objetivos muy claros:

- Mejorar, sin alteraciones fundamentales respecto a lo ya pactado, el sistema público de pensiones, atendiendo sobre todo a situaciones de discriminación derivadas de la vida laboral de algunos trabajadores y trabajadoras, sobre todo estas últimas.
- Cerrar el capítulo del salario mínimo interprofesional alcanzando el objetivo de que éste suponga el sesenta por ciento del salario medio, teniendo en cuenta además el episodio inflacionista actual, colocando por tanto el listón en los mil cien euros mensuales.
- Retomar la reforma del estatuto de los trabajadores para abordar todo lo referido al despido, tanto el colectivo como el individual, recuperando los requisitos e indemnizaciones previas a la reforma laboral del anterior Gobierno.
- Abordar de manera integral la prevención de riesgos laborales, de manera que el sistema sea más ágil en el reconocimiento de enfermedades profesionales, se tengan en cuenta las nuevas realidades del mundo laboral, con especial hincapié en los riesgos psicosociales, y se implique al sistema sanitario en la detección y la prevención de estos riesgos. No olvidemos que dos trabajadores y trabajadoras al mes, pierden la vida en nuestra comunidad allí donde van a ganársela

- Poner en pie un sistema de políticas activas de empleo equiparable al de los países más avanzados de la UE. La denuncia de desajustes en nuestro mercado de trabajo no tiene en cuenta la ausencia de políticas activas de empleo que deben garantizar no solo la satisfacción de las necesidades de las empresas, sino, sobre todo, la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Nada de ello podrá hacerse sin un importante esfuerzo presupuestario.

Pero sin duda el reto más importante del sindicato en este momento es la negociación de unos salarios que permitan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores o, lo que es lo mismo, el reparto de la riqueza.

Es indudable la importancia de políticas fiscales que garanticen la suficiencia de los recursos públicos para la provisión de los servicios públicos. La constatación del crecimiento de la desigualdad en todo el mundo, y también en nuestro país, hace aparecer un discurso de redistribución de la riqueza asociado a la imposición a las grandes fortunas o una fiscalidad unificada de las empresas que impida que éstas eludan el pago de impuestos.

Todas ellas son propuestas positivas, pero desde el punto de vista sindical debemos hacer hincapié, en primer lugar, en la distribución de las rentas que se lleva a cabo en la negociación colectiva. El salario es el principal ingreso de los trabajadores, y para una negociación equilibrada es necesario el fortalecimiento de la organización sindical en el conjunto de los países y en España en particular.

En ese sentido, nos reafirmamos en nuestra consigna de “salario o conflicto”. Ante la ausencia de la patronal en la mesa del diálogo social, que insistimos en reactivar, el camino pasa por la negociación sectorial. A falta de un acuerdo de negociación colectiva vertebrador que incluya criterios de reparto de cargas y beneficios entre empresarios y trabajadores y permita proteger a los trabajadores de sectores menos organizados, y ante la escandalosa acumulación empresarial de beneficios, no hay otro camino que la negociación sectorial, donde la combinación de movilización y negociación ha de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.



El año 2023 es un año electoral en el que se van a renovar las instituciones en los tres niveles de gobierno de nuestro país: local, autonómico y local.

Los trabajadores y trabajadoras deben acudir a las urnas para consolidar en ellas los derechos recuperados en los últimos años y seguir en el camino de la mejora de la sociedad y de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos.

En un momento de cambios estructurales desde el punto de vista económico, que conllevan siempre transformaciones sociales, los trabajadores y trabajadoras deben apoyar aquellas opciones que apuesten por un cambio progresista, que busque un reparto más equilibrado de la riqueza, extienda la democracia también al ámbito económico y

garantice los derechos y la igualdad de todos y todas. En las transformaciones económicas por venir no debe haber ni perdedores ni desplazados.

Por ello es imprescindible recordar las distintas maneras de abordar las últimas crisis. Frente a las políticas de austeridad, recortes, económicos y de derechos, y de aumento de la desigualdad impuestas ante la crisis financiera de 2008, el despliegue de políticas redistributivas y de protección de los más vulnerables ante la pandemia y la crisis inflacionistas. La más rancia derecha económica y política de nuestro país sigue defendiendo, pese al giro de sus correligionarios europeos, recetas que han demostrado agravar los problemas en vez de resolverlos.

Además, y estando convencidos de la necesidad de políticas que fortalezcan la organización sindical, la experiencia de los últimos años nos demuestra que existen fuerzas políticas de ultraderecha cuya influencia en los gobiernos, formando parte o no de ellos, busca debilitar a los sindicatos. Los trabajadores y trabajadoras deben acudir a las urnas pensando en alejar a estas fuerzas de la posibilidad de gobernar.

Por último, y acudiendo a la misma experiencia de la que hablamos más arriba, los trabajadores y trabajadoras deben buscar el fortalecimiento de los servicios públicos, que en gran medida prestan las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos. Aunque en última instancia hay que abogar por una financiación suficiente, no hay que olvidar que las políticas de privatización, aunque se disfracen de "colaboración público-privada", terminan generando desigualdad y privando de prestaciones a las clases más desfavorecidas, que son mayoría.